

Consideraciones Generales

¡Atención, faros de niebla!

Hace diez años, en nuestro primer Informe, *España 1993*, comenzábamos estas consideraciones generales con el aviso siguiente: “¡Atención, cambio de rasante!”. El conductor del vehículo pierde visibilidad ante una ondulación de la carretera, pero no duda de la existencia de la misma. No pierde la serenidad porque está seguro de que la calzada continúa. Le basta concentrar su atención y mantenerse prudentemente a la derecha. Está perfectamente orientado. No necesita sufrir el trance de buscar un nuevo camino. Con la niebla espesa se pierde la definición del paisaje y cualquier objeto móvil puede resultar un fantasma amenazante. La niebla nos desorienta y nos sobrecoge. Hay que recobrar los puntos de referencia, como en el desierto o en la nieve de la sierra.

El siglo XX podría pasar a la historia con el sobrenombre de “el siglo breve”. En realidad, el *ancien régime* tardó dos siglos en destruirse. Después de la Primera Guerra Mundial aún quedaban instituciones anacrónicas. Entonces se apoderó completamente de la humanidad la razón de la victoria. Los vencedores eran los árbitros y hasta los dueños del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial siguió prevaleciendo el imperio de los vencedores. La guerra fría mantuvo y hasta alimentó las “guerras de bajo desgaste”, que en definitiva se convertían en bazas favorables de la estrategia norteamericana. La caída del muro de Berlín (1989) favoreció la posición de Estados Unidos como poder hegemónico mundial. Resurgieron con más fuerza los odios étnicos, que llegaron a la locura en las guerras de los Balcanes.

Tom Engelhart analizó ya lo que él llama “*el fin de la cultura de la victoria*”¹, que horrorizó al mundo sucesivamente, primero con los campos de exterminio, primero nazi y después estaliniano, hasta bien entrada la guerra fría. ¿Cómo es posible que el siglo XX se cierre con experiencias tan dramáticas sin que hayamos aprendido casi nada de aquellas trágicas lecciones? Durante el primer bienio del siglo XXI todo el planeta se ha visto sumergido en la más pesada de las incertidumbres.

¹ Engelhart, T., *El fin de la cultura de la victoria. Estados Unidos, la guerra fría y el desencanto de una generación*, Paidós, Barcelona/ Buenos Aires, 1997.

El imperio de la fuerza desató el sentido de la inseguridad que ha ido desarrollándose hasta dominar a las sociedades más avanzadas. No quisiéramos que el siglo XXI fuera conocido como “el siglo del miedo”. El último ejemplo lo encontramos en Medio Oriente. El problema de la seguridad ha conducido el conflicto entre Israel y el pueblo palestino a la locura del triunfo de Ariel Sharon. Los electores prefirieron apoyar a un candidato que les ofrecía más seguridad que a un partido relativamente nuevo, como el de Shinui, que ofrecía un plan concreto de pacificación. El terror de los kamikazes palestinos y los crueles bombardeos a ciudadanos indefensos, ordenados por Sharon, han hecho imposible la paz. La seguridad se ha impuesto como norma decisiva en el voto democrático.

El ataque a las torres gemelas del World Trade Center llenó de pánico a los norteamericanos y a buena parte de los países más avanzados de Occidente. La guerra contra Afganistán se convirtió en una matanza inhumana sin lograr su objetivo principal, que era detener a Bin Laden, el terrorista más buscado. El mundo se quedó impasible ante la gasificación de más de cien civiles en un teatro de Moscú. El “eje del mal” es el último invento para trazar una nueva frontera imaginaria entre buenos y malos, según los criterios arbitrarios de la administración de George W. Bush. Hasta el momento los servicios secretos estadounidenses sólo han proporcionado indicios de que Osama Bin Laden y su organización Al Qaeda están oscuramente infiltrados en los países occidentales. Un enfrentamiento contra el Islam resulta del todo injusto e irracional.

El territorio ya no es clave en la seguridad

A medida que el mundo se hace cada vez más fluido y dinámico pierden importancia los factores espacio y tiempo y aparecen con tintes más dramáticos la seguridad del individuo y el reconocimiento de las identificaciones colectivas. Vivimos la paradoja histórica de la debilitación progresiva del Estado como garantía de fronteras territoriales que nos sirvan de refugio y una creciente demanda de seguridad que sólo puede venir del exterior, de un consenso que debe contar con todas las culturas y las necesidades vitales de todos los pueblos. El que crea en la imposibilidad de este proyecto o piense en el dominio por la fuerza de una superpotencia hegemónica debería renunciar a cualquier responsabilidad pública.

La inseguridad tiene mucho que ver, como ha señalado ya el sociólogo polaco Zygmunt Bauman², con “el fin simbólico de la era del espacio”. El ataque a las torres gemelas no fue otra cosa que la partícula arrojada al interior de un recipiente sobresaturado. Como en una reacción química, aquel atentado espectacular provocó la cristalización de unas sustancias que han modificado radicalmente la composición química del compuesto anterior. El

² Bauman, Z., “Guerras de reconocimiento en la frontera planetaria”, *Claves*, n. 120, marzo 2002.

territorio constituía la garantía de la seguridad. Desde la muralla china, pasando por las líneas Maginot y Siegfried, hasta el muro de Berlín, el territorio fue el más codiciado de los recursos y el más despreciable de los signos de insolidaridad. Buscamos el territorio como un refugio y como fuente propia de recursos vitales tales como el petróleo. El poder era territorial, como lo es la privacidad frente a las interferencias del Estado.

Todo esto, a nuestro juicio, se ha terminado porque ya nadie puede aislarse del resto del mundo. Se había terminado hace bastante tiempo. El derribo del muro de Berlín no fue solamente una chispa de la locomotora del sentido común. Simbolizó para la historia la inutilidad de las murallas y de las fronteras defensivas. Los atentados del 11 de septiembre fueron la puesta en escena de forma espectacular y convincente de que ninguna gran potencia física puede sentirse segura ante el terrorismo, aunque éste se trame a gran distancia.

Ya habrá entendido el lector que no podemos encerrarnos en la pura seguridad de la integridad física de nuestros cuerpos. Es más importante aún la seguridad de los espíritus. La pérdida de confianza en las instituciones y en los hombres constituye un síntoma quizá más alarmante de inseguridad. Ha surgido lo que Manuel Castells denomina el “espacio de flujos”, que no tiene territorio propio ni límites territoriales posibles. De las preocupaciones por la seguridad local hemos pasado a los problemas de la seguridad global. Se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de todas las partes del planeta por miedo o precaución con todos los demás, incluso hasta con los más distantes.

Por primera vez en la historia, está surgiendo la posibilidad de una opinión pública mundial interactiva y militante. Los estadistas y los políticos más avisados saben que esta participación es ya una potencia que desafía a sus propios gobernantes e instituciones internacionales.

La razón de la justicia global

La inseguridad se nutre de las múltiples e injuriosas desigualdades que se van poniendo de manifiesto en todo el planeta a través de las cumbres internacionales; de momento, estas reuniones de representantes de gobiernos y miles de ONGs han servido poco más que para incrementar aún más la indignación general. Así ha sucedido con la Cumbre de la Tierra de Río Janeiro y las más recientes sobre la financiación del desarrollo en Monterrey (marzo 2001) y sobre la alimentación en Roma. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS), celebrada el pasado mes de agosto en Johannesburgo buscaba encontrar un equilibrio entre crecimiento económico, desarrollo social y protección medioambiental.

En la nota final de Johannesburgo se habla de conseguir “una sociedad equitativa...y dignidad para todos” (art. 2), y de un plan de acción que está lleno de buenas palabras y buenas intenciones, pero totalmente falto de compromisos concretos. Los 2.000 millones de seres que viven en la pobreza tendrán que resignarse y esperar hasta la próxima cumbre. En el punto 25 se manifiesta el respeto a los principios de la Organización Internacional del Trabajo, sin que se haga ninguna referencia explícita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. EE UU hizo todo lo posible para que este hipotético reconocimiento de los derechos laborales se subordinara a la Organización Mundial de Comercio. La declaración tuvo que reconocer que muchos países no están aún en condiciones de aprovecharse de las ventajas de la globalización. Pero los países avanzados no señalaron ningún camino que pudiera ayudar a corregir esta situación. En el sector de la agricultura, por ejemplo, el problema principal del Tercer Mundo no es cómo acceder al mercado mundial, sino cómo poder defenderse del proteccionismo que cada país avanzado hace de su propia agricultura; en concreto cómo defenderse de las importaciones masivas de productos subvencionados en los países ricos.

El poder político y la capacidad de control y participación ciudadana, necesarios para la organización democrática, está retrocediendo peligrosamente ante un poder económico organizado con los criterios exclusivos del mercado, propios del neoliberalismo reinante. Asistimos a la emergencia de nuevos poderes que no son democráticos y que funcionan por encima y al margen de los poderes democráticos de los Estados. La cifra global de negocio de las cincuenta empresas más importantes del mundo es superior al total del PIB de los cincuenta países en vías de desarrollo, según los informes de la ONU. Muchas de estas cincuenta compañías controlan los productos estratégicos del desarrollo mundial (petróleo, electricidad, productos farmacéuticos, armamento, etc.). No menos grave es el hecho de que los grandes especuladores financieros mueven cantidades monetarias superiores a las de muchos Estados y lleguen a controlar cotizaciones de acciones y divisas según sus intereses particulares.

La injusticia y la desigualdad son signos distintivos del mundo actual. No caminamos hacia un sistema más justo, aunque quieran hacérselo creer los que hacen *marketing* del pensamiento único: la globalización es por su propia naturaleza selectiva. El poder de los grandes intereses económicos dicta el modelo de globalización. Así lo juzgaba Jean Baudrillard a finales de 2001: “La guerra que Estados Unidos y Gran Bretaña han declarado al terrorismo no es sino la ausencia de política por otros medios”³. La razón de la fuerza es disfrazada de legitimidad ética por jefes de gobierno que se llaman democráticos. La seguridad nunca se impondrá por la fuerza. Sin respeto al principio de la justicia, aumentará más bien la incertidumbre.

³ Baudrillard, J., “L’esprit du terrorisme”, *Le Monde*, 3 de noviembre de 2001, p. 11.

La razón democrática

Podríamos preguntarnos por qué algunas democracias entre las más arraigadas del mundo, como la norteamericana y la de Reino Unido, no aplican la “razón democrática” en sus actuaciones de política exterior. No deja de sorprender que los ciudadanos demócratas de una nación discriminen con facilidad a los de otros países. No podemos aceptar que el gobierno de una democracia se niegue a reconocer los derechos humanos de otros pueblos. Ni siquiera es razonable encerrarse en un determinado sistema de valores característicos como el de la cultura occidental. El estrechamiento de relaciones entre los pueblos en un mundo cada vez más complejo nos lleva a descubrir nuevos valores humanos que deben ser reconocidos y defendidos por la comunidad de naciones.

La conferencia que pronunció recientemente Manuel Castells en Barcelona⁴ nos ayuda a formular tres hipótesis de trabajo que podrían contribuir decisivamente a reforzar entre nosotros “la razón democrática”. La primera se refiere a las limitaciones del Estado-nación; la segunda, al funcionamiento mismo de nuestra democracia; y la tercera, a la utilización casi habitual del escándalo para la campaña electoral y la conquista del poder.

1. Reconocer la incapacidad del Estado-nación para garantizar la seguridad y bienestar de sus propios ciudadanos. El espacio de decisión en el que han de adoptarse las medidas económicas y democráticas que ofrezcan al mundo seguridad supera al del propio territorio. La limitación de poder de los Estado no afecta tanto a su existencia como a su configuración o estructura interior. Pero su existencia y estructuración, al menos en red, seguirá prestando una utilidad necesaria.

El proceso de globalización en curso obliga a los ciudadanos de una nación a reconocer los valores democráticos en el mundo global. Hemos comprobado que no podemos vivir en democracia “de puertas adentro”. Si el progreso y el desarrollo humano en el orden internacional no está estructurado y regido en lo esencial por pautas democráticas, nuestra democracia local será inviable. De ahí que, en nuestro tiempo, tengamos que enfrentarnos con el gran reto de construir la democracia a escala internacional, más allá de nuestras fronteras. Lo contrario equivaldría al desgobierno mundial.

A medida que se hace más necesaria la globalización nos anclamos con más fuerza en la defensa de nuestra identidad. Sólo un 15% de los europeos confiesa que prefiere ser cosmopolita. Los pueblos de Oriente Medio y de África quizá demuestren menos arraigo que los de Asia oriental. Por lo que se refiere a Europa y América, es evidente que nos sentimos

⁴ La pronunció el 14 de febrero de 2003 en la jornada sobre “Miseria y grandeza de la democracia”, organizada por el centro universitario ESADE de Barcelona.

desafiados para articular nuestras identidades propias con la globalización. Este desafío hierve en el fondo de la mayor parte de nuestros problemas domésticos.

Los problemas son de dimensión transnacional y exigen soluciones globales: el cambio climático, los flujos migratorios causados por la mala distribución de la riqueza mundial, el terrorismo y la delincuencia internacional, los problemas de mercado, etc., sobrepasan las dimensiones y posibilidades del Estado. Por otra parte, las actividades y crecimiento de las organizaciones transnacionales están ahí torpemente comprendidas o por desgracia dominadas por las potencias hegemónicas. Todas estas organizaciones extienden su actividad a un ámbito mucho más amplio que el del territorio estatal. La crisis de la territorialidad, a la que nos referíamos al comienzo de estas reflexiones, irrumpe ahora con fuerza sobre el Estado-nación y nos deja ver el fondo de no pocos conflictos entre nuestros derechos y libertades y la garantía de nuestra seguridad. Esta erosión de la eficacia del Estado repercute también en su legitimidad ante el ciudadano.

El Estado constitucional no es absoluto. Ni sus compromisos han de referirse en exclusiva a los ciudadanos de su territorio. Además de las organizaciones transnacionales, se encuentra ahora ante una red abigarrada de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que demuestran su eficacia para llegar a donde no alcanzan las Administraciones Públicas, incluso fuera de las propias fronteras. La cooperación con estas organizaciones es una condición para su buena inteligencia con la sociedad civil. Se integra en unidades más amplias supraestatales, que, por un lado, limitan su soberanía y, por otro, le ofrecen la ocasión de compartir decisiones dentro de soberanías más amplias, en ámbitos tan sensibles como el de la seguridad, el de la tecnología y el de la economía. Por otra parte, los sociólogos confirman que “en un mundo globalizado la gente se aferra a su identidad como fuente de sentido en sus vidas”⁵. Como señalamos antes, sólo el 15% se declara cosmopolita, y dentro del Estado el 38% se refiere en primer lugar al Estado-nación, mientras el 47% considera como su principal identidad de referencia la región o la localidad. Cuando se analizan los porcentajes por áreas del mundo, observa Manuel Castells, el nivel más alto de identidad local/regional primordial en el contexto mundial corresponde precisamente a la “Europa del Suroeste”, es decir, a nosotros. Los frutos de la descentralización del poder territorial dentro del Estado se manifiestan en la aproximación de los gobernantes al pueblo y la defensa de su propia cohesión social.

Para democratizar la globalización será necesario que las organizaciones internacionales de índole económica, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el llamado Grupo de los Siete se organicen de manera que se

⁵ Castells, M., “El poder de la identidad”, *El País*, 18 de febrero de 2003, p. 14.

escuche la voz de todos países afectados, se supriman la posibilidad de los vetos y el ejercicio del poder unilateral.

El Estado necesita de las organizaciones transnacionales: las necesita para mantener su seguridad macroeconómica, para defenderse del terrorismo y del crimen organizado, para el ejercicio de la justicia que persiga los crímenes contra la humanidad, para defender la opinión pública de los monopolios en los medios de comunicación. Será necesario construir un mundo sin fronteras, siempre que la seguridad y la libertad estén mejor garantizadas.

2. *Mejorar los mecanismos de la política.* Nuestra democracia ha alcanzado en veinticinco años un alto grado de legitimidad y satisfacción en el pueblo. Según las encuestas del CIS, en 1980 sólo la mitad de los españoles se identificaba con la frase “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Dieciocho años después (1998) ese porcentaje llegaba al 84%; en marzo de 2000 suscribían la misma frase el 85,7% de los españoles. La satisfacción con su funcionamiento es francamente alta. Si sumamos las respuestas “muy satisfecho” y “bastante satisfecho”, llegamos al 49,5% en 1996, 61% en 1997 y 64% en 1998 y 2000. En este mismo año sólo tres de cada diez españoles se manifiestan “poco” o “nada” satisfechos.

No es paradójico que, a pesar del favor de que goza en España el sistema democrático, los españoles hayan ido disminuyendo su interés por la política. Los españoles que se interesan por la política nacional han pasado de un 38% en el año de aprobación de la Constitución (1978), a un 29% en 2000. El 57% la sigue a diario por televisión, el 25% por la radio y sólo un 23% por los periódicos. En 1995 predominaba la opinión de que “el voto es la única forma en que la gente puede influir en lo que hace el gobierno” (72%) y de que “los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente” (69%). Los encuestados dan a entender un cierto desamparo político: “la política parece tan complicada que la gente como yo no puede entender lo que pasa” (54%).

Nada dicen estos porcentajes en contra de la capacidad de movilización de la sociedad española. Uno de cada tres españoles ha participado –y lo volvería a hacer– en una manifestación autorizada y uno de cada cuatro ha participado en una huelga. El asociacionismo está en auge, aunque todavía sea débil la tendencia: según la encuesta del 2000, el 16% confesaba pertenecer a una asociación de vecinos, el 14% a un club deportivo, el 11% a una asociación de padres, el 9,5% a una asociación cultural o artística, el 8% a un sindicato, el 5,8% a una ONG o asociación de solidaridad, y tan sólo un 3,5% a un partido político.

Las causas de esta aparente manifestación de apatía política son indudablemente muy complejas. Podemos, sin embargo, formular algunas hipótesis plausibles. Es evidente que los

asuntos políticos son cada vez más complejos. En cambio, el político ve enfrentada la complejidad con la necesidad de simplificar su mensaje para ser comprendido por sus electores. Tiene que darse a entender a través de esquemas y fórmulas tan simples que rozan la demagogia. En esta transmisión juegan un papel preponderante los medios de comunicación. Incluso son ellos los que establecen los términos del debate político. De todos ellos, la imagen televisiva es la más simplificadora. Y los españoles confiesan que siguen la política en su mayoría (57%) a través de la televisión. En esta forma de llegar al elector se encuentra sólo la imagen del político. Incluso no es exagerado afirmar que la complejidad de los asuntos y el programa del partido se reduce a lo que el líder es capaz de transmitir en los espacios televisivos, ya que prensa y radio tienen menos audiencia. Su influencia depende de sus talentos y habilidades personales. Se ha exagerado la importancia del atuendo y de la fisonomía personal. Sin negar la relativa importancia que puedan tener estos aspectos externos, está comprobado que los ciudadanos prestan más atención a sus cualidades morales, como la veracidad, la coherencia, el respeto al adversario y el reconocimiento de la pluralidad de los electores, jueces últimos en definitiva acerca de la credibilidad del candidato. El discurso reduccionista y simplificador, tan propiciado por la prensa, la radio y la televisión, tiene que conducir necesariamente a la apatía política. Los que gobiernan tienen que dejar de guiarse por lo que dicen los periódicos. Gobernar es mucho más que gestionar.

El gobernante tiene que demostrar un empeño decidido por conocer la complejidad de la realidad. Para este trabajo difícil y paciente no le bastan los consejeros áulicos. Ni pulsar con frecuencia la opinión a través de las encuestas. Parece más seguro buscar las ideas que sean fruto de una continuada reflexión en equipo realizada por grupos independientes. Los investigadores de la realidad saben lo que vale el trabajo interdisciplinar en equipo con especialistas de distintas tendencias para poder llegar a un diagnóstico lo más aproximado posible a lo que acontece. Sólo así podemos acercarnos a una realidad tan compleja y cambiante como es hoy la de nuestras sociedades abiertas. A esta necesidad común de conocer la realidad social se dirige nuestro Informe.

Deberíamos prestar mucha más atención a las estadísticas y hacerlas comparables para conocer las múltiples caras poliédricas del objeto de la realidad social. Las estadísticas vienen a ser como el sistema nervioso del cuerpo social. Nadie quiere vivir sin percibir la sensibilidad en todos los órganos de su cuerpo. Las fundaciones o grupos pensantes de los partidos no pueden estar dirigidas por sus líderes políticos. La libertad de pensamiento y de expresión del grupo debe estar garantizada. Los diagnósticos que están llamados a prestar estos *think tanks* a los dirigentes del partido requieren como condición indispensable la objetividad que está asociada a la libertad.

La democratización en la vida interna de un partido responde a su propia seguridad y eficacia. Nada hay más fácil que destruir la credibilidad de una persona que ha utilizado su liderazgo para dirigir el partido con formas personalistas. La organización del partido político no debe concebirse en función de la captación de votos para el líder. Debe responder a su fin primordial de socializar la política. La preocupación por someter el discurso político al mercado electoral lleva inexorablemente a perder radicalidad y coherencia ideológica y con ello a incapacitarse para crear proyectos movilizadores a causa de una excesiva uniformidad que contrasta con el pluralismo social existente. La vida política dejará de ser reflejo de los conflictos sociales, para reducirse a las luchas entre las élites dirigentes, que van distanciando la vida política de las bases y de las necesidades reales de la población. Cuando los grandes partidos se alejan de la realidad, que siempre es plural, se sitúan al borde de la fragmentación imposible de parar con el simple autoritarismo de la cúpula del partido.

En nuestras sociedades desarrolladas se desdibuja la división de poderes y el control entre ellos. Se comprueba la tendencia imparable a acentuar la función del Ejecutivo, que a su vez desarrolla la burocracia de manera que el Gobierno-Administración llega a ser el verdadero motor del Estado, en detrimento del Parlamento y otras instituciones democráticas.

3. *Democratización de la sociedad civil.* Los españoles no creen en los políticos, pero sí creen en la política. La capacidad de movilización que demuestran determinadas causas lo ha demostrado especialmente estos últimos meses. La manipulación del escándalo de la corrupción como procedimiento para desacreditar al adversario político y llegar más pronto al poder ha demostrado ya sus funestas consecuencias en España. Mina la credibilidad no sólo entre los políticos, también entre los grupos y partidos. El escándalo debe ser perseguido e identificado, de manera principal por la justicia. Utilizarlo como sanción social o descrédito del adversario político contribuye a disminuir la confianza necesaria para la democratización.

El electoralismo perturba seriamente el debate público. No es justo resaltar en el discurso público sólo las diferencias. El debate lógico y necesario entre gobierno y oposición no supera la polémica, en la que predomina la demagogia, el dogmatismo y el desprecio del adversario. Los valores democráticos no son apreciados por aquellos que deberían hacer gala de ellos. La cacofonía dominante, sonorizada por los medios, es deprimente y contribuye a reforzar la desconfianza en la ciudadanía.

España viene de una sociedad fraccionada por mil desencuentros históricos. El corporativismo traspasa nuestro tejido social. Persisten oligarquías o grupos de poder que han resistido el cambio hacia la democracia. De hecho, muchos grupos de presión actúan enmascarados con el disfraz de personajes honestos. Sería más útil que los *lobbys* fueran transparentes. Todavía la profesionalidad no ocupa las primeras filas de la estima popular, que

admira más el poder del dinero, del apellido o el de la frívola popularidad. Las clases medias, desarrolladas bajo la dictadura, favorecen la estabilidad y la moderación. Se interesan más por la garantía de las libertades formales que por los asuntos de la vida pública.

Hay que redefinir el sentido del servicio público. Deben hacerse constar sus características. Ninguna de ellas se identifica necesariamente con algún organismo del Estado, aunque sobre éste recaiga lógicamente la responsabilidad de exigir que instituciones privadas cumplan con las exigencias del servicio público. La corrupción de una institución o individuo se da tanto en las personas públicas que ocultan un negocio particular bajo el manto de lo público como en los privados que montan su negocio particular con el disfraz de servicio público. Los servicios públicos transferidos a colectivos privados tienen que poner en juego medidas de gestión que aseguren la participación democrática.

El asociacionismo no pasa de ser un hervor tibio de nuestra sociedad civil. Habrá que fomentar la colaboración con los poderes públicos en los ámbitos que le sean propios. Los partidos políticos tienen que revisar su posición recelosa ante los grupos y movimientos sociales. Su tendencia a invadir toda la esfera de la vida civil es notoria.